



REPORTE | JUNIO 2026

TIEMPO DE ACTUAR: POLÍTICA DE ESPAÑA HACIA MARRUECOS

Francisco Pascual de la Parte
Embajador y analista del IBCG

Con la colaboración de **Ignacio Cembrero** y **Juan Antonio del Castillo Masete**

INSTITUTO PARA EL
BIEN COMÚN GLOBAL



ÍNDICE:

I. Consideraciones previas.....	1
II. De la descolonización a la asociación asimétrica.....	7
III. Las reivindicación territoriales marroquíes.....	9
IV. Inmigración irregular y territorial.....	12
V. El contexto estratégico: OTAN, Rusia y el flanco sur.....	14
VI. Fuerzas armadas de España y Marruecos: comparación y capacidades.....	22
VII. Evaluación de la política española hacia Marruecos.....	27
VIII. Urgencia de una política española más adecuada a los retos.....	29
XI. Conclusión.....	30

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

Al analizar las relaciones con nuestro vecino del sur, no podemos eludir el examen de tres factores que las condicionan y que no por ocultados resultan menos ciertos:

1.1. INESTABILIDAD ESTRUCTURAL

Las relaciones entre España y Marruecos no pueden ser las normales entre países vecinos. Y ello, por decisión soberana de Rabat, ya que la monarquía Alauita considera objetivo irrenunciable de su estatalidad reivindicar y, en su caso, hacerse con territorios que son parte integrante y están sometidos a la soberanía de otro Estado, en este caso España. A partir de ahí, la relación con Marruecos no puede ser sino estructuralmente inestable, con etapas de distensión o de crisis recurrentes, pero nunca de normalidad; y sobre esta realidad debe articularse nuestra relación bilateral.

La relación entre España y Marruecos constituye uno de los ejes más complejos, recurrentes y mal gestionados de la política exterior española contemporánea. Separados por apenas catorce kilómetros en el estrecho de Gibraltar y unos metros en Ceuta y Melilla —la frontera más corta entre Europa y África—, ambos países comparten una historia de siglos marcada por la proximidad geográfica, la interdependencia económica y una rivalidad estratégica que ningún gobierno de Madrid ha conseguido resolver de manera definitiva. Lo que podría y debería ser una relación de asociación privilegiada y mutuamente beneficiosa se ha convertido, en la práctica, en un contencioso permanente, periódicamente interrumpido por crisis agudas que revelan la ausencia de una estrategia española coherente, de largo plazo y respaldada por voluntad política real.

1.2. LA “QUINTA COLUMNA”: FACTORES ENDÓGENOS DE LA DEBILIDAD ESPAÑOLA FRENTE AL REVISIONISMO MARROQUÍ

La política exterior de un Estado es, en última instancia, el reflejo de su cohesión interna. España presenta ante Marruecos una posición estructuralmente debilitada no solo por las asimetrías geopolíticas evidentes —un vecino con demografía más expansiva, apoyos internacionales diversificados y una diplomacia de presión sistemática—, sino por una serie de patologías políticas domésticas que Rabat conoce, calibra y explota con notable eficacia.

A) El sectarismo político como multiplicador de vulnerabilidad

La primera y más determinante de estas patologías es la incapacidad española para articular una política de Estado en materia marroquí que trascienda los ciclos electorales y las rivalidades partidistas. En las democracias consolidadas, ciertos ámbitos —defensa nacional, política exterior estratégica, integridad territorial— funcionan sobre la base de consensos suprapartidistas que blindan al Estado frente a la presión exterior. España ha sido históricamente incapaz de construir ese consenso respecto a Marruecos.

El resultado es que cada cambio de gobierno implica una reorientación táctica —cuando no un giro estratégico— en la relación bilateral, ofreciendo a Rabat una ventana de oportunidad recurrente. Marruecos es un actor paciente y de largo plazo; España es un actor reactivo y de corto plazo. Esta asimetría temporal es tan determinante como cualquier desequilibrio de poder material. En 2021 el gobierno español autorizó la entrada encubierta de Brahim Ghali para tratamiento médico en Logroño, retrasando la información oficial para poder compensarla con el anuncio de otra, más favorable a Marruecos, que se estaba gestionando en Bruselas. Pero no calibró la eficacia de los servicios de inteligencia marroquíes, que lo averiguaron antes, ni la contundente respuesta de Rabat. Ello ilustra con precisión cómo la lógica interna de coalición puede subordinar los intereses estratégicos del Estado a los intereses tácticos del partido en el gobierno.

B) La Instrumentalización Electoral de la Inmigración

El segundo factor es quizás el más pernicioso porque opera en una zona de intersección entre política interior y seguridad exterior. La inmigración irregular procedente del norte de África —fundamentalmente Marruecos y, en menor medida, Argelia y el África subsahariana con tránsito marroquí— ha sido sistemáticamente instrumentalizada por distintos actores del espectro político español, aunque con lógicas opuestas.

Una parte del espectro político ha construido sobre la inmigración una narrativa de victimización y aperturismo que hace políticamente costoso cualquier endurecimiento de los controles o cualquier exigencia de reciprocidad a Marruecos en materia migratoria. Esta posición, presentada como humanitaria, tiene el efecto práctico de privar al Estado español de uno de sus principales instrumentos de presión sobre Rabat: la gestión coordinada del flujo migratorio como variable de la relación bilateral.

Marruecos ha convertido la migración en un arma de coerción de primer orden. El episodio de la “invasión” de Ceuta, en mayo de 2021 —cuando las autoridades marroquíes fomentaron el cruce de la frontera por más de diez mil personas en 48 horas— no fue una crisis humanitaria espontánea sino una operación de presión política calculada, ejecutada con precisión milimétrica en respuesta a la hospitalización de Ghali.

La respuesta española, paralizada entre la necesidad de defender su territorio y el temor al coste político de una imagen percibida como dura, fue exactamente la que Rabat había anticipado: confusa, tardía e insuficiente.

Mientras España debate internamente si la defensa de sus fronteras es compatible con sus valores progresistas, Marruecos gestiona el flujo migratorio como un instrumento de política exterior sin ninguna inhibición ideológica.

C) La actividad clandestina y el problema de la soberanía real

El tercer factor es más estructural y menos debatido públicamente: la presencia en territorio español de redes de influencia, captación e incluso inteligencia vinculadas a actores norteafricanos, con particular intensidad en las ciudades de Melilla, Ceuta, y las grandes concentraciones urbanas peninsulares con población de origen marroquí.

Esto no equivale a afirmar que la comunidad marroquí residente en España sea en bloque un factor de riesgo —es una afirmación que sería tan imprecisa como injusta—. Lo que sí constituye un hecho documentado es la existencia de estructuras organizadas —algunas con vínculos a redes islamistas, otras al propio Estado marroquí a través de sus mecanismos de proyección exterior como el Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero— que operan en España con una capacidad de influencia y una discrecionalidad que las instituciones españolas han preferido no confrontar abiertamente. Tienen a sueldo a los imanes de Ceuta y Melilla, sufragan algunas mezquitas e impulsan la creación de un lobby español promarroquí con Atalayar a la cabeza.

Esto último tiene raíces múltiples: el coste político de medidas que serían calificadas de islamofóbicas, la complejidad jurídica de actuar contra ciudadanos con residencia legal, y la dependencia de la cooperación marroquí en materia antiterrorista, que ha creado una relación de dependencia que Rabat no duda en recordar cuando las relaciones se tensan. España ha subcontratado parcialmente su seguridad interior en el corredor del Estrecho al actor respecto al cual necesita mantener una posición firme. Es una contradicción estructural de enorme magnitud.

D) La confluencia: Un sistema de inhibiciones recíprocas

Lo que hace especialmente grave la situación no es ninguno de estos factores por separado, sino su confluencia en un sistema de inhibiciones mutuas. El sectarismo político impide construir una política de Estado; la instrumentalización electoral de la inmigración favorece el uso de la variable migratoria por Marruecos como instrumento de presión; la dependencia en materia de seguridad interior convierte a Marruecos en un socio irrenunciable incluso cuando actúa como adversario; y la presencia en España de redes de influencia dificulta el debate público honesto sobre todos estos asuntos.

El resultado es que España llega a cada episodio de presión marroquí —Perejil, Ceuta, el Sáhara, las aguas de Canarias— sin una posición consolidada, sin instrumentos de presión operativos y sin el respaldo de un consenso político interno que dé credibilidad a sus señales disuasorias.

Marruecos no necesita ganar ninguna batalla militar. Le basta con mantener la presión, esperar el próximo ciclo electoral español y negociar con quien llegue al gobierno las condiciones de una normalización que Rabat siempre plantea en sus propios términos. La debilidad española no es solo geopolítica. Es, en medida decisiva, una construcción propia.

1.3. LA DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA A DEFENDER SU PAÍS

Es un debate que se evita conscientemente. Las encuestas del Eurobarómetro y del WIN/Gallup muestran consistentemente que España se encuentra entre los países europeos con menor disposición declarada a luchar por su país en caso de guerra. Los datos oscilan según el año, pero España suele aparecer con cifras en torno al 20-30%, frente a países como Finlandia o Polonia que superan el 70-80%.

Las causas son estructurales y conocidas: secuelas del franquismo que asociaron el militarismo con la dictadura, décadas de paz y prosperidad relativa, erosión del sentido de identidad nacional cohesionada, y una cultura política que ha venerado el pacifismo y desvalorizado institucionalmente a las Fuerzas Armadas en ciertos sectores.

¿Hasta qué punto afectaría esto a una amenaza marroquí?

Aquí conviene distinguir con precisión varios planos:

A) El nivel estratégico-disuasorio

La disposición popular influye poco en la disuasión inicial. Lo que disuade a Marruecos no es que los españoles quieran morir por Ceuta o Melilla, sino la percepción de que España activaría mecanismos institucionales —OTAN, UE— y recursos militares profesionales. La voluntad popular es un factor secundario en este cálculo.

B) El nivel operativo profesional

El Ejército español es completamente profesional desde 2001. La capacidad de respuesta inmediata a una agresión marroquí no depende del recluta motivado sino de unidades como la Legión, los Regulares, la Brigada Paracaidista o la Infantería de

Marina. En escenarios de baja o media intensidad —que es lo que la amenaza marroquí plantea realísticamente— la masa movilizada de población civil es irrelevante operativamente.

C) El nivel político-estratégico (aquí sí importa)

Donde la desmotivación popular sí tiene peso real es en la disposición del gobierno a sostener una crisis prolongada o escalada. Un gobierno español sabe que no puede contar con un respaldo popular masivo y sostenido si un conflicto con Marruecos se prolonga o genera bajas. Esto:

- Reduce el margen de maniobra político del gobierno ante Rabat
- Hace más tentadora la solución negociada o el repliegue diplomático
- Puede ser calculado por Marruecos como un activo en su favor en situaciones de presión gradual (salami tactics)

D) El factor de presión migratoria como arma híbrida

La amenaza marroquí más probable no es una invasión convencional, sino una presión híbrida: instrumentalización de flujos migratorios, presión sobre Ceuta/Melilla mediante desbordamiento controlado de fronteras, o escalada de soberanía en el Sáhara. En estos escenarios, la opinión pública española sí es un vector de presión: Marruecos sabe que parte no desdeñable de la sociedad española prefiere el apaciguamiento al conflicto abierto, y lo explota diplomáticamente.

Valoración de conjunto

La desmotivación de la población española no compromete la capacidad militar táctica frente a Marruecos en el corto plazo. El Ejército profesional mantiene una capacidad de respuesta razonable. Pero sí erosiona la postura estratégica en tres sentidos:

- Reduce la credibilidad de la voluntad política de resistir presiones graduales
- Limita el respaldo doméstico para medidas de disuasión costosas (refuerzo de Ceuta/Melilla, inversión en defensa)
- Facilita que Marruecos apueste por la guerra de desgaste político antes que por la confrontación militar directa, que nunca fue su instrumento preferido

En ese sentido, la verdadera vulnerabilidad española no está en los cuarteles sino en la falta de consenso nacional sobre qué intereses merecen ser defendidos con firmeza, lo que Marruecos lee con claridad desde Rabat.

En consecuencia, nuestro análisis debe tener en cuenta una premisa ineludible: España ha carecido históricamente de una gran estrategia en su relación con Marruecos. En su

lugar, ha optado por la gestión reactiva de las crisis, la subordinación de los intereses nacionales a consideraciones económicas o electorales de corto plazo, y una marcada dependencia de la agenda diplomática europea para enmarcar —y dilatar— conflictos que requieren soluciones bilaterales directas. Esa ausencia de estrategia no es casual: refleja una cultura política que tiende a evitar los costes visibles de la firmeza, pero que acaba pagando costes mayores, más difusos y más difíciles de atribuir a decisiones concretas.

Una vez aclarado lo anterior, ya estamos en condiciones de analizar los orígenes y ejes fundamentales de la política exterior española hacia el reino alauí, evaluar en qué medida dicha política ha sido —o no— adecuada para hacer frente a las amenazas concretas que Marruecos plantea para los intereses españoles, y examinar el contexto geoestratégico más amplio en el que se inscribe esta relación bilateral: el debilitamiento del flanco sur de la OTAN, la penetración del islamismo radical, la instrumentalización de los flujos migratorios irregulares, y el papel de actores exteriores —en particular Rusia— interesados en explotar las fricciones hispano-marroquíes para erosionar la cohesión de la Alianza Atlántica en un momento de especial fragilidad interna.

II. DE LA DESCOLONIZACIÓN A LA ASOCIACIÓN ASIMÉTRICA

2.1. EL LEGADO COLONIAL

La política española hacia Marruecos no puede entenderse sin referencia a su sustrato histórico. España mantuvo un protectorado sobre la zona norte de Marruecos desde 1912 hasta la independencia en 1956. Esta experiencia colonial dejó un legado ambiguo: por un lado, lazos culturales, lingüísticos y humanos relativamente profundos; por otro, reivindicaciones territoriales no resueltas que el Estado marroquí ha convertido en elementos constitutivos de su identidad nacional e instrumentos de presión política. A diferencia de Francia, que gestionó el proceso de descolonización desde una posición de fuerza y negoció con Marruecos en términos relativamente equilibrados, España lo hizo desde la debilidad política del tardofranquismo y bajo la presión de múltiples frentes simultáneos. La cesión del Sáhara Occidental en 1975 —mediante los Acuerdos de Madrid, firmados en el contexto de la agonía de Franco y la presión de una Marcha Verde de trescientas cincuenta mil personas organizada por el rey Hassan II— constituye el momento fundacional de una dinámica que se perpetuará durante décadas: la cesión española ante la presión marroquí como método preferido de gestión del conflicto.

Desde entonces, Marruecos ha incorporado a su repertorio diplomático una mecánica bien establecida: cada vez que necesita algo de España —concesiones en materia de pesca, regularización de inmigrantes, apoyo en foros internacionales para su posición sobre el Sáhara— aplica presión en alguno de los flancos sensibles: Ceuta, Melilla, las aguas canarias o los flujos migratorios. Y España, sistemáticamente, ha respondido con concesiones.

2.2. EL MARCO JURÍDICO BILATERAL Y SUS LAGUNAS

La relación hispano-marroquí está formalmente articulada en torno a una serie de tratados bilaterales, el principal de los cuales es el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991, completado posteriormente por acuerdos sectoriales en materia de pesca, migraciones, cooperación policial y seguridad. Este andamiaje jurídico, formalmente sólido, ha resultado en la práctica escasamente efectivo para prevenir las crisis recurrentes, por tres razones fundamentales.

En primer lugar, porque Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y mantiene activa su reclamación ante la ONU (a pesar de que esas ciudades no figuran en la lista de territorios no autónomos del Comité de Descolonización), de modo que el Tratado de 1991 coexiste con una reivindicación territorial que lo vacía parcialmente de contenido político. En segundo lugar, porque los acuerdos de cooperación en materia migratoria han funcionado de manera selectiva, siendo

Marruecos quien decide cuándo y en qué medida los aplica, en función de sus intereses coyunturales. En tercer lugar, porque España nunca ha articulado mecanismos de presión efectivos para hacer cumplir los compromisos marroquíes, lo que ha generado una asimetría estructural en la que Marruecos dispone de más instrumentos de presión que España.

III. LAS REIVINDICACIONES TERRITORIALES MARROQUÍES

3.1. CEUTA Y MELILLA: SOBERANÍA BAJO PRESIÓN PERMANENTE

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son territorio español desde el siglo XV y el XVI respectivamente, con anterioridad en varios siglos a la constitución del Estado marroquí moderno. Aunque los historiadores marroquíes lo ponen en tela de juicio, su españolidad está respaldada por el Derecho Internacional, por el Tratado de Utrecht y por la Carta de las Naciones Unidas, que garantiza la integridad territorial de los Estados. Sin embargo, Marruecos mantiene una reclamación soberana sobre ambas ciudades, que incluye en su discurso oficial como territorios ocupados, y ejerce periódicamente presión para que sean objeto de negociación bilateral.

Esta presión adopta formas diversas: declaraciones oficiales de ministros y del propio monarca, maniobras diplomáticas en foros internacionales —especialmente en la ONU y en la Unión Africana—, permisividad selectiva con las avalanchas de inmigrantes hacia las vallas perimetrales, e intentos de utilización de la diáspora marroquí residente en ambas ciudades como palanca de influencia demográfica y política. La estrategia es de largo plazo: Marruecos no espera que España ceda en el corto plazo, pero mantiene viva la reclamación como elemento de presión constante y como señal de identidad nacional.

La respuesta española ha sido consistentemente defensiva y reactiva. Madrid ha rechazado la negociación sobre soberanía, pero no ha articulado una política proactiva para reforzar el vínculo de las ciudades con el conjunto del Estado, para invertir en su infraestructura y cohesión social, ni para internacionalizar su defensa en el marco europeo o atlántico. La OTAN, cuya presencia en el Mediterráneo occidental tiene implicaciones directas para la seguridad de Ceuta y Melilla, nunca ha debatido formalmente el estatus de estas ciudades ni ha articulado garantías explícitas sobre su integridad territorial, lo que deja a España en una posición de mayor vulnerabilidad de la que formalmente correspondería a un miembro de la Alianza.

3.2. LAS AGUAS TERRITORIALES DE CANARIAS

El archipiélago canario plantea un contencioso diferente pero igualmente significativo. La cuestión central, y silenciada en España, es la delimitación de la Zona Económica Exclusiva entre Canarias y la costa africana, en una zona geográficamente compleja donde las aguas marroquíes, saharianas y españolas se superponen en reclamaciones parcialmente incompatibles. Esto genera zonas de solapamiento marroquí con la ZEE española en torno a Canarias: España aplica la equidistancia entre ambas costas (la del archipiélago canario y la continental marroquí) como criterio de delimitación, mientras que Marruecos aplica el principio de la proporcionalidad, según el cual la ZEE de

Canarias no puede ser tan amplia como la de Marruecos, porque un archipiélago de “enclaves” no puede tener una ZEE igual a la de una zona continental.

Este contencioso tiene consecuencias prácticas muy concretas: afecta a los derechos de pesca de los barcos españoles, a la explotación de posibles recursos energéticos en el fondo marino, y a la jurisdicción sobre el tráfico marítimo y aéreo en la zona. Los acuerdos pesqueros negociados en el marco de la Unión Europea han aliviado parcialmente la tensión, pero no han resuelto el fondo del contencioso, que permanece latente y es periódicamente activado por Marruecos como elemento de presión.

La dimensión estratégica de Canarias va más allá de la pesca. El archipiélago es la plataforma logística y de inteligencia más importante de España en el Atlántico sur, con instalaciones de la OTAN y presencia permanente de fuerzas armadas españolas. Su proximidad a la costa africana lo convierte en el destino natural de las rutas migratorias cuando se intensifica la presión en el estrecho. El hecho de que Marruecos mantenga una reclamación sobre las aguas adyacentes y tenga capacidad para modular los flujos migratorios hacia el archipiélago le otorga un instrumento de presión de primera magnitud sobre España.

3.3. EL SAHARA OCCIDENTAL: EL CONTENCIOSO SIN RESOLVER

El Sáhara Occidental es, probablemente, el elemento más complejo y con mayores implicaciones estratégicas de las relaciones hispano-marroquíes. España fue la potencia administradora del territorio hasta 1976, año en que lo abandonó de facto mediante los Acuerdos de Madrid sin haber organizado el referéndum de autodeterminación al que estaba obligada por el derecho internacional. Desde entonces, Marruecos ocupa la mayor parte del territorio, mientras el Frente Polisario —apoyado por Argelia y reconocido internacionalmente como representante del pueblo saharauí— controla una franja al este del muro de arena construido por Rabat.

La posición española ha oscilado históricamente entre una neutralidad formal que en la práctica beneficiaba a Marruecos, y el apoyo implícito al proceso de negociación auspiciado por la ONU, cuyo objetivo era hasta hace poco un referéndum de autodeterminación que nunca se ha celebrado. En marzo de 2022, el gobierno de Pedro Sánchez dio un giro radical a esta política al comunicar al rey Mohamed VI, mediante una carta privada filtrada posteriormente a la prensa por la casa real de Marruecos, que España apoyaba el plan de autonomía marroquí como base para la resolución del conflicto. Esta decisión, tomada unilateralmente y sin consenso parlamentario ni debate público, supuso un alineamiento explícito con la posición marroquí y un abandono del principio de neutralidad que España había mantenido durante décadas.

Las consecuencias de este giro han sido significativas. Argelia, que considera el apoyo al Polisario como un elemento central de su política exterior, reaccionó con la ruptura del tratado de amistad con España y la suspensión temporal del suministro de gas natural. Dado que el gasoducto Medgaz representa una parte importante del suministro energético español, la crisis puso de manifiesto la vulnerabilidad energética derivada de una decisión diplomática precipitada. Además, el giro generó tensiones internas en la coalición de gobierno, con Unidas Podemos manifestando su oposición, y deterioró la imagen de España como socio previsible y coherente en política exterior.

El episodio del Sáhara ilustra con precisión el problema estructural de la política española hacia Marruecos: la ausencia de una estrategia sostenida y la tendencia a tomar decisiones de gran calado en respuesta a presiones coyunturales, sin evaluación suficiente de las consecuencias a medio y largo plazo.

IV. INMIGRACIÓN IRREGULAR Y TERRORISMO

4.1. LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN

Marruecos ha convertido el control de los flujos migratorios en uno de sus instrumentos de presión más eficaces sobre España y, por extensión, sobre la Unión Europea. La dinámica es bien conocida: cuando la relación bilateral atraviesa una fase de tensión, las autoridades marroquíes relajan su vigilancia de las costas y permiten —o incluso facilitan— un incremento de las salidas irregulares hacia España. Cuando la relación mejora o se obtienen las concesiones deseadas, la cooperación policial se intensifica y los flujos disminuyen.

El episodio más dramático y revelador se produjo, como dijimos, en mayo de 2021, cuando en 48 horas llegaron a las playas de Ceuta y a través de la verja de separación más de diez mil personas, muchas de ellas a nado, en lo que fue la mayor crisis migratoria puntual en la historia de España. La crisis se produjo poco después de que España permitiera al líder del Polisario, Brahim Ghali, recibir tratamiento médico en un hospital español —un gesto que Marruecos interpretó como un desafío diplomático—. La correlación temporal fue tan evidente que resultó imposible negar la instrumentalización. La respuesta española fue enviar al ejército a la playa de El Tarajal para auxiliar a los llegados, devolver a la mayoría de ellos en los días siguientes, y abrir aceleradamente un proceso de desbloqueo diplomático con Rabat.

Esta dinámica tiene consecuencias que van más allá de la crisis humanitaria inmediata. En primer lugar, normaliza la utilización de seres humanos (menores incluidos) como moneda de cambio en las relaciones bilaterales, con el coste humano y la degradación moral que ello implica. En segundo lugar, crea un incentivo perverso: cuanto más eficazmente Marruecos demuestra su capacidad de activar los flujos, más valiosa resulta su cooperación para contenerlos, y mayor es el precio que puede cobrar por ello. En tercer lugar, convierte a España en un Estado cuya política exterior en uno de sus ejes más sensibles está parcialmente determinada por las decisiones de un país vecino, lo que supone una erosión significativa de su autonomía estratégica.

La Unión Europea ha intentado gestionar esta dinámica a través de acuerdos de financiación —la Agencia “Frontex”, los fondos de cooperación con Marruecos para la gestión migratoria— pero con resultados limitados, precisamente porque los incentivos estructurales que hacen a Marruecos mantener abierta esta palanca de presión son más fuertes que los que lo llevarían a renunciar a ella. La solución, si existe, requeriría una política europea de inmigración genuinamente unificada —que no existe— y una capacidad española de ejercer presión de retorsión sobre Marruecos —que tampoco existe en la práctica—.

4.2. EL TERRORISMO ISLAMISTA: LA AMENAZA INTERNA

Marruecos constituye también el principal país de origen de los yihadistas que han perpetrado atentados en suelo español. Los autores de los atentados de Madrid de 2004, que causaron ciento noventa y una muertes, eran en su mayoría ciudadanos marroquíes o españoles de origen marroquí. Los autores de los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, que causaron dieciséis muertos, procedían todos ellos de la célula de Ripoll, formada por jóvenes de origen marroquí nacidos o criados en España (uno era musulmán de Melilla, hijo de padres españoles).

Esto no implica, en modo alguno, que la comunidad marroquí en España sea homogéneamente proclive a la radicalización —nada más lejos de la realidad— sino que las redes de reclutamiento yihadista han encontrado en determinados segmentos de esa comunidad un terreno fértil, y que la cooperación con las autoridades marroquíes en materia de inteligencia y contraterrorismo es un elemento absolutamente crítico para la seguridad española.

En este ámbito, la cooperación hispano-marroquí ha funcionado razonablemente bien, con intercambios de información que han permitido desarticular numerosas células antes de que pudieran actuar. Sin embargo, esta cooperación tiene también un lado oscuro: Marruecos dispone de información sobre redes y personas que puede compartir o retener en función de la temperatura de la relación bilateral. La dependencia española de la inteligencia marroquí en materia de contraterrorismo es, en este sentido, otro factor que otorga a Rabat capacidad de influencia sobre las decisiones de Madrid.

La presencia en España de una comunidad de origen marroquí que supera el millón de personas, en gran parte integrada y contribuyente a la sociedad española, es al mismo tiempo un activo —un puente humano entre dos países— y una potencial vulnerabilidad, en la medida en que redes de radicalización operan en sus márgenes y la política española no ha articulado programas suficientemente sólidos de prevención y desradicalización. La gestión de esta realidad requiere, entre otras cosas, una relación bilateral con Marruecos que combine la cooperación leal con la firmeza estratégica: cooperar en lo que interesa a ambas partes, sin que esa cooperación se convierta en un factor de vulnerabilidad para España.

V. EL CONTEXTO GEOSTRATÉGICO: OTAN, RUSIA Y EL FLANCO SUR

5.1. EL ACERCAMIENTO DE TURQUÍA A MARRUECOS Y EL ALEJAMIENTO DE ESPAÑA

Un elemento que ha adquirido creciente relevancia en los últimos años, pero que apenas recibe atención en el debate público español, es el sistemático acercamiento de Turquía a Marruecos y el correlativo alejamiento estratégico de España de su vecino magrebí. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha cultivado con esmero la relación con Mohamed VI, elevando el volumen de intercambios comerciales, expandiendo la presencia de empresas turcas en el mercado marroquí, desarrollando proyectos de cooperación en defensa —con ventas de drones Bayraktar que podrían reforzar la capacidad militar marroquí— y proyectando en Marruecos la influencia religiosa y cultural del islam político de orientación otomana que caracteriza a la Turquía de Erdogan.

Este acercamiento turco-marroquí tiene implicaciones estratégicas que España no ha evaluado suficientemente. Turquía es miembro de la OTAN, pero ha adoptado en los últimos años una política exterior crecientemente autónoma, marcada por el enfrentamiento con Grecia en el Mediterráneo oriental, la intervención en Libia en apoyo de milicias islamistas, la compra de sistemas de defensa antiaérea rusos S-400, y una postura ambivalente en relación con el conflicto de Ucrania. Un Marruecos con creciente presencia turca en su economía y en sus fuerzas armadas es un Marruecos que se hace más difícil de gestionar para España y para la OTAN en general.

Paradójicamente, en el mismo período en que Turquía ha reforzado su presencia en Marruecos, España ha protagonizado las mayores crisis diplomáticas de su historia reciente con Rabat: el affaire Ghali de 2021, el giro sobre el Sáhara de 2022, y las tensiones recurrentes sobre Ceuta, Melilla y los flujos migratorios. España se ha alejado de Marruecos no porque tenga una estrategia alternativa más sólida, sino por una acumulación de decisiones reactivas y mal coordinadas que han erosionado la confianza bilateral sin ofrecer nada a cambio.

5.2. LA AUSENCIA DE UNA ESTRATEGIA DE LA OTAN PARA EL FLANCO SUR

La OTAN ha dedicado la mayor parte de su atención estratégica, desde su fundación, al flanco este —la frontera con el bloque soviético primero, con Rusia después— y al Mediterráneo oriental, donde la presencia de Turquía y la complejidad de Oriente Próximo exigen atención permanente. El flanco sur —el Mediterráneo occidental, el Magreb, el Sahel— ha sido históricamente el gran ausente de la planificación estratégica aliada.

Esta ausencia tiene consecuencias directas para España. Madrid no puede invocar garantías explícitas de la OTAN en relación con sus contenciosos con Marruecos, porque la Alianza nunca ha articulado una posición formal sobre el estatus de Ceuta, Melilla o las aguas canarias. El artículo 5 del Tratado de Washington —la cláusula de defensa colectiva— se aplicaría en caso de un ataque armado directo contra territorio español, pero la forma en que Marruecos ejerce su presión —mediante flujos migratorios, declaraciones diplomáticas, maniobras en aguas disputadas— no alcanza el umbral de un ataque armado que activara dicha cláusula.

La Cumbre de Madrid de 2022 supuso un cierto avance en el reconocimiento de las amenazas procedentes del sur, al incluir referencias al terrorismo, la migración irregular y la inestabilidad del Sahel como riesgos para la seguridad aliada. Sin embargo, este avance fue fundamentalmente retórico: no se tradujo en nuevos planes de contingencia para el flanco sur, ni en compromisos adicionales de presencia aliada en el Mediterráneo occidental, ni en una posición clara de la Alianza sobre los contenciosos hispano-marroquíes.

La ausencia de estrategia aliada en el flanco sur es, en parte, consecuencia directa de las carencias de la propia España. Un aliado que no invierte suficientemente en su defensa, que no ha articulado una posición estratégica coherente sobre sus propios contenciosos, y que tiende a gestionar su relación con Marruecos de manera bilateral y reactiva, difícilmente puede movilizar a sus socios para que adopten una posición colectiva sobre amenazas que él mismo no ha definido con claridad.

5.3. EL DÉFICIT ESPAÑOL DE CONTRIBUCIÓN A LA OTAN

España ha sido sistemáticamente uno de los aliados con menor nivel de gasto en defensa de la Alianza Atlántica, consistentemente por debajo del objetivo del dos por ciento del PIB acordado en la Cumbre de Gales de 2014 y reafirmado en cumbres sucesivas. Durante años, el gasto de defensa español ha oscilado en torno al uno por ciento del PIB —aproximadamente la mitad del mínimo acordado—, una situación que el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su intención de corregir, pero cuya corrección práctica ha sido lenta y parcial.

Este déficit de contribución tiene consecuencias que van más allá de la disponibilidad de medios materiales. En términos políticos, un aliado que no cumple con sus compromisos financieros tiene menor autoridad moral para exigir solidaridad y compromiso de los demás cuando sus intereses están en juego. La capacidad española de influir en la agenda estratégica de la OTAN —incluyendo el reconocimiento del flanco sur como una prioridad— está directamente condicionada por su nivel de contribución al esfuerzo colectivo.

La tendencia del presidente Trump, durante su segundo mandato, a utilizar el incumplimiento del objetivo del dos por ciento como argumento para cuestionar el valor de los compromisos estadounidenses con los aliados europeos, añade una dimensión adicional de urgencia a esta cuestión. Un Trump escéptico de los aliados europeos y una España que no alcanza el nivel de contribución acordado es una combinación que reduce significativamente la credibilidad de las garantías de seguridad atlánticas para España precisamente en el momento en que más las necesita.

Conviene recordar, en este punto, que el flanco sur de la OTAN no es una abstracción geográfica: es el estrecho de Gibraltar, es Ceuta y Melilla, son las aguas canarias. La debilidad militar española en ese flanco no solo deja expuestos a los intereses españoles, sino que crea una vulnerabilidad en el sistema defensivo aliado que otros actores —incluyendo Rusia y, potencialmente, Marruecos en escenarios de mayor tensión— pueden intentar explotar.

5.4. RUSIA Y LA TENSIÓN HISPANO-MARROQUÍ COMO INSTRUMENTO

Rusia ha desarrollado en los últimos años una estrategia sistemática de erosión de la cohesión de la OTAN mediante la explotación de sus contradicciones internas y la amplificación de las fricciones entre aliados. Esta estrategia, que ha encontrado terreno abonado en las tensiones greco-turcas, en las fricciones entre países bálticos y Hungría, y en el escepticismo de Trump hacia el multilateralismo atlántico, tiene también una dimensión meridional que afecta directamente a España.

Moscú tiene un interés estratégico claro en debilitar la posición de la OTAN en el Mediterráneo occidental. Una Alianza dividida entre sus miembros mediterráneos y con el flanco sur mal cubierto es una Alianza menos capaz de proyectar presencia en el mar Mediterráneo y en el Atlántico norte, y menos capaz de responder de manera cohesionada a los movimientos rusos en África —donde Moscú ha expandido su presencia a través del Grupo Wagner y sus sucesores en Mali, Burkina Faso, Níger y Libia—. La desestabilización del Sahel y la expansión de la influencia rusa en el África subsahariana crea, además, presión adicional sobre los flujos migratorios que Marruecos puede luego instrumentalizar contra España.

En este contexto, la tensión hispano-marroquí resulta funcionalmente conveniente para los intereses rusos, aunque no sea necesariamente diseñada o controlada por Moscú. Cuando España y Marruecos están enfrentados, España dedica recursos diplomáticos y políticos a gestionar esa crisis bilateral en lugar de contribuir activamente a la agenda de la OTAN. Cuando Marruecos presiona a España con los flujos migratorios, el debate público español se polariza en torno a la inmigración, generando divisiones internas que debilitan la capacidad del gobierno de formular posiciones exteriores coherentes. Cuando España realiza concesiones sobre el Sáhara para apaciguar a Marruecos y esto

deteriora su relación con Argelia, España pierde un interlocutor importante en el Magreb y queda en una posición más aislada en la región.

Rusia ha demostrado en otros contextos su capacidad de amplificar y explotar estas dinámicas a través de sus medios de comunicación —RT, Sputnik—, sus redes de influencia en partidos políticos europeos de los extremos del espectro, y sus operaciones de desinformación dirigidas a polarizar los debates en los países aliados. No hay razón para suponer que el caso español sea una excepción. El escepticismo de Trump hacia sus aliados europeos proporciona a Moscú un contexto adicional favorable: en un entorno en que la cohesión atlántica es cuestionada desde dentro por el propio hegemon de la Alianza, la explotación de fricciones bilaterales entre aliados europeos resulta más efectiva y menos costosa para Rusia.

5.5. EL TRIÁNGULO DE INESTABILIDAD MARRUECOS-ESPAÑA-ARGELIA

En el crisol de razas, pueblos y culturas que sucesiva o simultáneamente han invadido, ocupado o transitado por nuestra 'piel de toro' desde tiempos prehistóricos[1], se han alternado pueblos de procedencia tanto europea como africana. En ese trasiego, el Estrecho de Gibraltar ha demostrado ser tanto o más permeable que los Pirineos, de modo que, si bien nuestra situación geoestratégica se encuentra inserta en el componente europeo de Occidente, tanto en el ámbito político como económico, defensivo y cultural, es imposible negar que, con igual o mayor intensidad, nos vemos también sujetos a las influencias del Magreb.

A la complejidad geopolítica regional que implica directamente a España, Marruecos y Argelia, se suman otros factores: el valor del Estrecho como “Choke Point” con la presencia del Reino Unido en Gibraltar, la sombra francesa proyectada por los intereses derivados de su presencia colonial en la zona y, en un ámbito más general, los intereses de Estados Unidos con presencia de su Sexta Flota, los de la República Popular China con sus vías comerciales de la Ruta y la Franja, y la presencia militar rusa en el Norte de Africa (Libia y el Sahel).

Sin remontarnos a la Reconquista, con sus invasiones de almohades, almorávides y benimerines, a la cautividad de Cervantes en Argel o a los continuos enfrentamientos con los reinos y piratas berberiscos en nuestra costa mediterránea y norte e Africa, la interacción militar más relevante entre los tres países vino marcada por el conflicto de Sidi-Ifni de 1957 entre España y Marruecos, el conflicto fronterizo de la "Guerra de las Arenas" de 1963 entre Marruecos y Argelia, y la tensión militar previa a la firma de los

[1] Las primeras migraciones prehistóricas desde África a la Península Ibérica comenzaron hace aproximadamente 1,3 millones de años. A lo largo de la prehistoria, el Estrecho de Gibraltar y el entorno del Mar Mediterráneo funcionaron como vías de conexión fundamentales para el flujo de homínidos y humanos modernos.

Acuerdos de Madrid de 1975 (Marcha Verde), por los que España cedió a Marruecos y Mauritania la administración temporal del Sahara Español. Sobre el trasfondo del conflicto, aún activo, entre Marruecos y Argelia por la asistencia de esta última a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), se insertan el alternativo apoyo de España a cada una de las partes y el incidente militar por el islote de Perejil en 2002.

En el ámbito político, salpicado de acciones híbridas, tiene lugar la reivindicación por Marruecos de Ceuta y Melilla, los peñones costeros de Alhucemas y Vélez de la Gomera, las islas Chafarinas, la isla de Alborán, en la provincia de Almería y, como vimos, una parte de la de la Zona Económica Exclusiva de España entre la costa atlántica marroquí y las islas Canarias, especialmente al sur de la isla del Hierro, donde se encuentra el monte submarino Tropic, de gran interés por sus recursos minerales.

La antedicha rivalidad entre los tres vecinos se ha visto agravada recientemente por los conflictos de Ucrania e Irán, que han comprometido los suministros energéticos de Europa, reduciendo, con ello la autonomía estratégica de España.

Ante esa situación, Marruecos se ha lanzado a un ambicioso programa de rearme que le puede convertir en la principal potencia militar del Magreb y que tiene su origen en su cada vez más tensa relación con Argelia, hasta el punto de que ambos han roto relaciones diplomáticas en 2021, pero también en sus ambiciones expansionistas para constituir el Gran Marruecos. Además, su acercamiento a Israel al suscribir los Acuerdos de Abraham en 2020 y el acuerdo bilateral de cooperación en defensa de 2026, se añade a su colaboración más estrecha con EE.UU. Eslo lo enfrenta a Argelia, que mantiene su colaboración con Rusia y deja en tierra de nadie a España, que se ha sumado a Francia en el reconocimiento de la solución marroquí para el Sahara, mientras que por otra parte se ha convertido en el paladín de la oposición a la agresión israelí y a la política de EE.UU. en Oriente Medio.



La reacción de Marruecos al acercamiento entre España y Argelia, que representó el retorno del embajador argelino a Madrid en 2023, fue inmediata, activando una de las estrategias más visibles de Rabat: el uso de la presión migratoria como herramienta de política exterior.

Además de la presión migratoria, Marruecos ha adoptado una diplomacia de crisis más directa. Tras obtener el apoyo de España a su plan de autonomía en el Sáhara Occidental, Rabat reforzó su presencia militar y de seguridad en la frontera de Melilla. Esta postura se ha interpretado como un claro mensaje a Madrid: Marruecos está dispuesto a tomar medidas drásticas para impulsar sus reclamaciones.

Marruecos también ha participado en acciones menos transparentes, demostrando con ello una estrategia de diplomacia en la sombra que recuerda su reacción al ingreso clandestino del presidente saharauí Brahim Ghali en un hospital español en 2022, que desencadenó una crisis diplomática. Este enfoque demuestra una comprensión más completa de los mecanismos de poder y una creciente importancia de las operaciones encubiertas en la diplomacia moderna.

Tras el giro español en la cuestión del Sahara Occidental, se ha producido en el citado triángulo una situación, en la que cabe subrayar los siguientes elementos:

A) Consolidación del eje Madrid-Rabat (2022-2024)

Marruecos devolvió a su embajadora a Madrid, disminuyó la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, reactivó la cooperación migratoria y antiterrorista, aumentó la coordinación económica y energética y, en definitiva, consolidó su estrategia internacional de obtener reconocimientos implícitos sobre el Sáhara, siguiendo la línea ya iniciada por Estados Unidos en 2020. España, por su parte, priorizó la estabilidad fronteriza, el control migratorio, la cooperación en seguridad y el acceso preferente al Magreb atlántico. Pero no obtuvo concesión alguna en lo referente al reconocimiento marroquí de su soberanía sobre Ceuta, Melilla y las aguas territoriales del Magreb atlántico.

B) Rivalidad estructural Marruecos-Argelia

El conflicto regional entre Marruecos y Argelia se convirtió en el verdadero marco del triángulo. España quedó atrapada entre su dependencia energética de Argelia y su dependencia estratégica de Marruecos para inmigración y seguridad. Argelia, por su parte, reforzó vínculos con otros socios europeos como Italia y Francia, intentando aislar diplomáticamente a España. Al mismo tiempo, Marruecos profundizó su relación militar y tecnológica con EE. UU. e Israel, mientras que Argelia reforzó su eje tradicional con Rusia y mantuvo apoyo al Frente Polisario. El Magreb volvió a funcionar como espacio de competencia regional y proyección de grandes potencias.

C) Amenazas híbridas y espionaje

Otro episodio relevante fue el caso Pegasus: surgieron sospechas de espionaje a miembros del gobierno español y numerosos análisis apuntaron a intereses marroquíes en plena crisis bilateral. Aunque nunca hubo acusación definitiva oficial, el episodio mostró cómo la rivalidad regional también se trasladaba al terreno cibernético y de inteligencia.

D) Normalización parcial de las relaciones hispano-argelinas (2025-2026)

Con el tiempo, España y Argelia empezaron a recomponer relaciones, teniendo lugar la reactivación diplomática, la recuperación del comercio y la continuidad del suministro de gas vía Medgaz. La razón principal fue pragmática: España necesitaba estabilidad energética y Argelia necesitaba mantener ingresos y acceso al mercado europeo. Sin embargo, España no revirtió su posición sobre el Sáhara, por lo que la reconciliación ha sido más funcional que estratégica.

E) Balance geopolítico regional

Desde 2022, el triángulo España-Marruecos-Argelia ha pasado de un equilibrio relativamente ambiguo a una lógica de alineamientos más claros, donde España se acerca estratégicamente a Marruecos sin poder romper completamente con Argelia debido al factor energético.

Ganadores

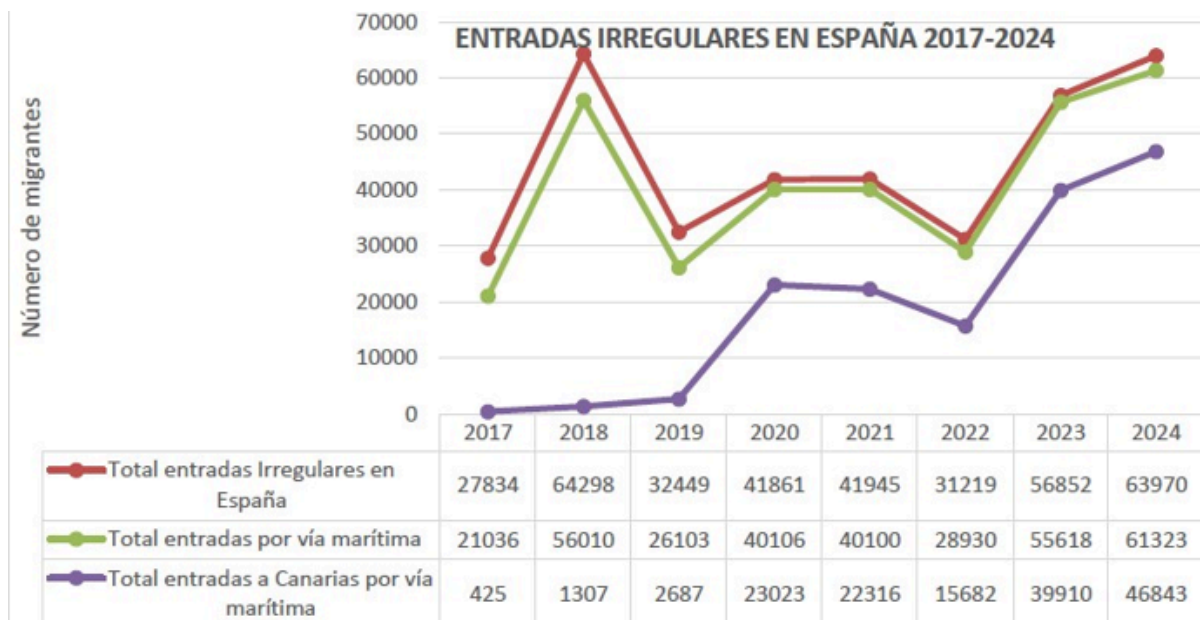
- **Marruecos:** logró un importante reconocimiento diplomático y reforzó su centralidad estratégica para Europa.
- **España:** recuperó cooperación migratoria y estabilidad con Rabat, aunque a costa de tensiones con Argel.

Perdedores

- **Argelia:** perdió influencia sobre Madrid, aunque mantuvo su peso energético.
- **El proyecto de integración magrebí:** quedó aún más bloqueado por la rivalidad regional.

En el futuro, las relaciones entre Argelia, Marruecos y España podrían tomar diversos rumbos. Si el acercamiento argelino-español continúa, podría conducir a una reevaluación de las alianzas y estrategias en la región. Marruecos podría verse obligado a moderar sus acciones o, por el contrario, a intensificarlas para salvaguardar sus

intereses. Además, la comunidad internacional, en particular la Unión Europea y las Naciones Unidas, podría desempeñar un papel más activo en la mediación del conflicto del Sáhara Occidental. La necesidad de una solución duradera y equitativa es cada vez más evidente, no solo para la paz regional, sino también para la seguridad y la estabilidad del Mediterráneo. En este gran juego cada movimiento es crucial, y las decisiones que se tomen hoy configurarán el panorama geopolítico del mañana.



Sea como fuere, un conflicto armado entre Argelia y Marruecos parece improbable por ahora, porque ambas perderían oportunidades de negocio que están obteniendo de los conflictos de Ucrania y Oriente Medio. Aunque, si ocurriera, acabaría afectando a España y, por consiguiente, a la UE. No obstante, las tensiones por el Sáhara seguirán ahí, y no parece que Argelia y Marruecos vayan a restablecer relaciones diplomáticas, cooperar y reabrir el gasoducto Magreb-Europa, por el momento. Tampoco parece probable que a corto plazo Marruecos opte por actos de amenaza o agresión contra Ceuta o Melilla, lo que no impide que mantenga sus reivindicaciones y refuerce sus bases militares en las proximidades de ambas, a lo que España deberá estar muy atenta.

Por tanto, parece ser el momento propicio para que España, aprovechando la “ventana estratégica”, tome la iniciativa de negociar para proteger sus intereses. Estamos en un punto en el que parece conveniente perfilar objetivos y llegar a acuerdos, comenzando por lograr un consenso de Estado en que la soberanía del territorio es innegociable.

VI. FUERZAS ARMADAS DE ESPAÑA Y MARRUECOS: COMPARACIÓN ESTRATÉGICA Y CAPACIDADES

6.1. MARCO NORMATIVO Y ESTRATÉGICO DE ESPAÑA

La política de defensa española descansa sobre tres pilares normativos fundamentales: la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, que establece el marco constitucional de las Fuerzas Armadas y su dependencia del mando civil; la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), cuya versión más reciente es la de 2021, que identifica los riesgos y amenazas prioritarios para España —entre los que se incluyen expresamente el terrorismo yihadista, los flujos migratorios irregulares y la inestabilidad en el Mediterráneo y el Sahel—; y la Ley de Programación Militar (LPM) 2024-2030, que establece el marco de inversión plurianual para la modernización de las capacidades militares.

La ESN 2021 reconoce por primera vez de manera explícita que el flanco sur constituye una zona de atención prioritaria para la seguridad española, identificando la inestabilidad del Magreb y el Sahel, la presión migratoria y el terrorismo islamista como amenazas que requieren una respuesta integrada. Sin embargo, la brecha entre el diagnóstico estratégico y los medios asignados para hacerle frente ha sido históricamente amplia, y la LPM 2024-2030 representa el primer intento serio de cerrarla, aunque con importantes limitaciones en personal y capacidad industrial.

En cuanto al gasto, España ha mantenido durante años uno de los niveles más bajos entre los aliados de la OTAN, oscilando en torno al 0,9-1,3% del PIB. En abril de 2025, el presidente Sánchez anunció un plan de inversión adicional de 10.741 millones de euros para alcanzar el objetivo del 2% del PIB en el mismo ejercicio, sumando un total de 33.123 millones en seguridad y defensa. A 1 de enero de 2025, las Fuerzas Armadas contaban con 116.739 militares en activo, con un déficit estimado de entre 13.000 y 23.000 efectivos respecto al marco establecido por la Ley de la Carrera Militar. El SIPRI registró un incremento del gasto militar español del 50% en 2025, hasta los 40.200 millones de dólares —el segundo mayor aumento porcentual de la OTAN, solo superado por Bélgica—, aunque dicho salto incorpora partidas de seguridad interior y ciberseguridad reorientadas desde otros ministerios.

6.2. MARCO NORMATIVO Y ESTRATÉGICO DE MARRUECOS

La política de defensa de Marruecos presenta una arquitectura radicalmente diferente. El rey Mohamed VI es simultáneamente jefe de Estado, comandante supremo de las Fuerzas Armadas Reales (FAR) y jefe de Estado Mayor, lo que otorga al monarca una centralidad estratégica sin equivalente en los sistemas parlamentarios europeos. No existe una estrategia de seguridad nacional publicada en sentido formal comparable a la española, pero la dirección estratégica de las FAR se articula a través de directivas reales —la más reciente de relevancia fue emitida el 14 de mayo de 2024, con motivo del 68.º aniversario de la creación de las FAR— en las que Mohamed VI ordenó revisar y actualizar los conceptos de seguridad y defensa, incorporar inteligencia artificial y métodos innovadores de formación, y desarrollar una industria de defensa nacional.

El objetivo declarado de Marruecos es construir una defensa multidimensional que cubra tierra, mar, aire y el espacio digital, con especial énfasis en la industria armamentística propia. En julio de 2020, el reino adoptó un decreto que actualiza el marco legal para el apoyo a la industria de defensa nacional, y en junio de 2024 se aprobó la creación de dos zonas de aceleración industrial específicamente dedicadas a la producción de material militar. La reimplantación del servicio militar obligatorio en 2019 responde también a una concepción estratégica que busca disponer de una reserva amplia y una sociedad con mayor cultura de defensa.

En términos presupuestarios, el gasto de defensa marroquí ha crecido de manera sostenida desde 2019, pasando de 8.900 millones de euros a 12.300 millones en 2025 —un incremento del 7,25% respecto a 2024—, lo que representa aproximadamente el 9,6% del PIB del país, una proporción muy superior a la de cualquier miembro europeo de la OTAN. Este esfuerzo presupuestario en relación con la renta disponible es un indicador de la prioridad política que Rabat otorga a su capacidad militar.

6.3. EFECTIVOS Y CAPACIDADES TERRESTRES

Las FAR cuentan con aproximadamente 235.000 militares en activo y 250.000 reservistas, de los cuales el 88% se encuadra en el Ejército Real. España, con 116.739 militares en activo, supera a Marruecos en calidad de instrucción, integración en sistemas de mando aliados y nivel tecnológico de sus cuadros, pero el diferencial numérico es significativo, en especial en un escenario de tensión en el norte de África donde la masa crítica de efectivos desplegados tiene valor operativo inmediato. Marruecos supera a España en número de efectivos y en blindados terrestres.

En cuanto a material terrestre, el rearme marroquí de los últimos años ha sido espectacular. Las FAR han adquirido 222 tanques M1A1 SA y 162 M1A2 SEP v3 Abrams

—el principal carro de combate del ejército de los Estados Unidos, de gran eficacia probada en condiciones desérticas—, 50 carros blindados chino-pakistaníes VT-1A, 200 vehículos Cobra II turcos y 50 M-ATV estadounidenses. En artillería de cohetes dispone de 36 sistemas ATMOS 2000, 12 PHL-03 AR y sistemas WS-2D, y tiene prevista la recepción de 18 lanzadores HIMARS con misiles ATACMS. España, por su parte, opera el Leopard 2E como carro de combate principal, considerado de calidad comparable o superior al Abrams en algunos parámetros, y afronta la modernización de su componente acorazado mediante el programa VCR 8x8 Dragón —con 348 unidades contratadas por 2.100 millones de euros—, si bien con retrasos en la cadena de suministro.

6.4. CAPACIDADES AÉREAS: VENTAJA ESPAÑOLA, BRECHA EN DRONES

En el dominio aéreo, España mantiene una ventaja tecnológica clara sobre Marruecos gracias a su flota de Eurofighter Typhoon, que supera en todos los parámetros relevantes —radar, guerra electrónica, misiles de largo alcance, capacidades furtivas relativas— a los F-16 en servicio en la Real Fuerza Aérea marroquí. Los Eurofighter españoles están equipados con el misil Meteor, de largo alcance activo más allá del visual, sin equivalente en el arsenal marroquí. España opera el Programa Halcón, que incorporará 20 nuevos Eurofighter de última generación (Tranche 4) para reemplazar a los F-18 de Canarias, y mantiene los F-18 en servicio hasta el horizonte de 2035-2040, mientras el FCAS —el sistema de combate aéreo del futuro desarrollado con Francia y Alemania— avanza con retrasos.

Sin embargo, existe una brecha operativa importante en el ámbito de los drones. Marruecos es el segundo país africano con mayor flota de vehículos aéreos no tripulados, con aproximadamente 230 unidades, incluyendo Bayraktar TB2 turcos con capacidad de ataque y guía láser, drones Akinci de mayor alcance, sistemas israelíes Heron, Harop y Hermes 900 con capacidad antiblindado, y drones chinos Wing Loong I y TB-001. En diciembre de 2024, se inauguró en Benslimane una planta de producción de drones turcos Baykar, operada por la filial marroquí Atlas Defense, con capacidad para producir 1.000 unidades anuales. España, por el contrario, carece de un solo dron armado operativo: sus MQ-9 Reaper se emplean exclusivamente en funciones de vigilancia. Esta asimetría en drones de ataque es una de las más significativas del balance bilateral.

Marruecos tiene además en cartera la recepción de 25 F-16 Block 72 Viper y la modernización de 23 F-16 Block 52+ al estándar Viper, además de 36 helicópteros de ataque AH-64E Apache —cuya entrega comenzó en enero de 2025— y 22 helicópteros T-129 ATAK turcos. La combinación de F-16 modernizados, Apaches y drones de ataque otorga a las FAR una capacidad de fuego aéreo táctico que no existía hace una década.

6.5. CAPACIDADES NAVALES: VENTAJA ESPAÑOLA MÁS PRONUNCIADA

En el dominio naval, España mantiene una ventaja más pronunciada y estructural sobre Marruecos. La Armada española opera el portaaviones Juan Carlos I, cinco fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán —con sistemas de combate Aegis y misiles Standard de largo alcance—, cuatro submarinos convencionales clase S-70 y el primer submarino de la nueva clase S-80 (Isaac Peral), que representa un hito tecnológico al situar a España entre los diez países capaces de diseñar y construir submarinos convencionales. Tiene en construcción cinco fragatas F-110 clase Bonifaz, cuya primera entrega está prevista para 2028, y en proyecto la incorporación de fragatas adicionales y nuevos buques anfibios.

La Marina Real marroquí, por su parte, es significativamente más pequeña y con menor capacidad de proyección oceánica. Marruecos ha realizado adquisiciones recientes —helicópteros Bell 412 EPI para guerra antisubmarina, patrulleros oceánicos—, pero ninguno de los sistemas adquiridos le permite rivalizar con la Armada española en combate naval de alta intensidad. La asimetría naval entre ambos países es, probablemente, la más amplia y duradera del balance militar bilateral.

6.6. BALANCE ESTRATÉGICO Y TENDENCIAS

El índice “Global Firepower” sitúa a España en el puesto 17 del mundo y a Marruecos en el puesto 59 sobre 145 países evaluados, lo que refleja con precisión la diferencia de capacidades globales. España mantiene, como vimos, ventajas cualitativas claras en las dimensiones naval, aérea —salvo en drones de ataque— e institucional: la integración en la estructura de mando de la OTAN, la experiencia en operaciones multinacionales y el nivel de instrucción de sus cuadros son activos que Marruecos no puede replicar en el corto plazo.

Sin embargo, el vector de tendencia es el elemento más preocupante. Marruecos lleva una década de rearme sostenido y acelerado, con un porcentaje del PIB dedicado a defensa que triplica o cuadruplica el español. La brecha se está cerrando en las capacidades terrestres y en algunas dimensiones aéreas, particularmente en drones. La combinación de drones de ataque turcos e israelíes, HIMARS, tanques Abrams y F-16 modernizados confiere a las FAR una capacidad de fuego a distancia que las hace cualitativamente más peligrosas que hace diez años, y que plantea interrogantes reales sobre la defensa de Ceuta y Melilla en escenarios de tensión elevada.

España, por su parte, enfrenta dos cuellos de botella que el dinero solo resuelve parcialmente: el déficit de personal —entre 13.000 y 23.000 efectivos por debajo del mínimo necesario— y la limitada capacidad industrial para absorber el ritmo de gasto anunciado. Las fábricas españolas de defensa no tienen capacidad libre suficiente, y los grandes programas —F-110, S-80, VCR Dragón— acumulan retrasos. El riesgo es que el incremento presupuestario genere capacidades sobre el papel pero no operativas en tiempo útil.

La conclusión estratégica es inequívoca: España sigue siendo militarmente superior a Marruecos en términos globales, pero esa superioridad se está erosionando en las dimensiones terrestres y en drones, y el coste político de cualquier escenario de tensión sería con Marruecos —en Ceuta, Melilla o en las aguas canarias— sería extremadamente elevado para España en términos de disponibilidad de fuerzas, posición aliada y credibilidad estratégica. Una política de defensa coherente con los riesgos identificados requiere no solo más dinero, sino una priorización explícita del flanco sur en la planificación operativa y en los programas de modernización.

VII. EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA: LUCES Y SOMBRAS

7.1. LAS CARENCIAS ESTRUCTURALES

La política española hacia Marruecos adolece de varias carencias estructurales que han permanecido relativamente constantes a lo largo de los sucesivos gobiernos, con independencia de su color político. La primera y más fundamental es la ausencia de una gran estrategia: España no ha definido con claridad qué tipo de relación quiere tener con Marruecos en el horizonte de dos o tres décadas, cuáles son sus intereses irrenunciables, cuáles son las líneas rojas que no está dispuesta a cruzar, y qué instrumentos de presión está dispuesta a utilizar para defender esos intereses.

La segunda carencia es la descoordinación institucional. La política hacia Marruecos involucra a múltiples ministerios —Exteriores, Interior, Defensa, Comercio, Agricultura y Pesca, Transición Ecológica— que con frecuencia actúan sin suficiente coordinación y a veces con objetivos contradictorios. No existe un órgano de coordinación interministerial con capacidad real de definir y ejecutar una estrategia coherente.

La tercera carencia es la ausencia de instrumentos de presión propios. España ha optado históricamente por gestionar su relación con Marruecos casi exclusivamente a través del diálogo diplomático y las concesiones, sin desarrollar capacidades de disuasión —económica, diplomática, militar— que le permitan elevar el coste de las presiones marroquíes. Esta ausencia de instrumentos de presión no solo debilita la posición española en las crisis: también reduce el incentivo de Marruecos para respetar los intereses españoles en períodos de calma, porque sabe que la asimetría seguirá existiendo en el siguiente ciclo de tensión.

7.2. LOS AVANCES Y SUS LÍMITES

Sería injusto no reconocer que la política española hacia Marruecos ha registrado también avances reales. La cooperación en materia de contraterrorismo ha permitido desarticular numerosas redes yihadistas con impacto potencial sobre España. La gestión de los flujos migratorios, aunque imperfecta y asimétrica, ha evitado en algunos períodos crisis humanitarias de mayor magnitud. Los intercambios económicos y comerciales entre ambos países han crecido sustancialmente, con España como uno de los principales inversores y socios comerciales de Marruecos. Y la cooperación cultural y educativa ha generado lazos humanos genuinamente valiosos.

Sin embargo, estos avances han tenido un carácter fundamentalmente sectorial y reactivo. No han formado parte de una estrategia coherente orientada a objetivos de largo plazo, sino que han sido el resultado de la gestión pragmática de intereses compartidos en cada ámbito específico. La prueba de esta fragilidad es que las crisis recurrentes —el episodio de Perejil en 2002, la crisis de 2021 en Ceuta, las tensiones de 2022 tras el giro sobre el Sáhara— han borrado temporalmente años de acumulación de confianza y han revelado que la relación bilateral descansa sobre fundamentos más frágiles de lo que sugiere la retórica oficial de asociación y vecindad privilegiada.

VIII. URGENCIA DE UNA POLÍTICA ESPAÑOLA MÁS ADECUADA A LOS RETOS

Una política exterior española más adecuada a la complejidad y a las amenazas que plantea Marruecos requeriría, al menos, los siguientes elementos.

En primer lugar, la elaboración de una estrategia nacional de seguridad que identifique explícitamente los intereses españoles en relación con Marruecos, defina los escenarios de riesgo —incluyendo los más incómodos—, y establezca los instrumentos de respuesta disponibles en cada caso. Esta estrategia debería ser suficientemente estable para sobrevivir a los cambios de gobierno, lo que requiere un grado de consenso político que actualmente no existe.

En segundo lugar, España debería invertir de manera decidida y sostenida en sus capacidades militares para alcanzar el objetivo del dos por ciento del PIB de gasto en defensa, no solo por los compromisos contraídos en la Alianza, sino porque unas Fuerzas Armadas más capaces son la base de cualquier política de disuasión creíble en el flanco sur. Las posiciones en el estrecho, en Ceuta y Melilla, y en las Canarias requieren medios materiales suficientes para que la declaración de soberanía tenga correlato en capacidad real de defensa.

En tercer lugar, España debería impulsar activamente en el seno de la OTAN el desarrollo de una estrategia específica para el flanco sur, que incluya planes de contingencia para los escenarios de mayor riesgo, compromisos de presencia aliada en el Mediterráneo occidental, y una posición colectiva sobre el estatus de los territorios españoles en el norte de África. Para ello, necesita aliados naturales —Italia, Portugal, Francia— con quienes construir una posición común antes de llevarla al Consejo del Atlántico Norte.

En cuarto lugar, la dependencia española de la cooperación marroquí en materia migratoria y de contraterrorismo debe ser reducida mediante la diversificación de instrumentos: mayor inversión en capacidades propias de vigilancia costera y aérea, cooperación más intensa con otros países de la región —incluida Argelia, con la que la relación debe ser reconstruida—, y una posición más activa en la negociación de una política europea de migración que no deje a España sola ante la presión.

En quinto lugar, y quizás más importante, España necesita reconstruir la credibilidad de su política exterior como Estado que defiende sus intereses de manera coherente y predecible. Las oscilaciones sobre el Sáhara, la gestión improvisada de la crisis de 2021, las inconsistencias entre el discurso y la práctica en materia de defensa, han erosionado esa credibilidad tanto ante Marruecos como ante los aliados europeos y atlánticos. La credibilidad es un activo estratégico que se construye en décadas y se pierde en meses: recuperarla requiere consistencia, no gestos espectaculares.

IX. CONCLUSIÓN

La política exterior española hacia Marruecos ha sido, en términos generales, inadecuada para la complejidad y la magnitud de las amenazas que plantea la relación bilateral. No porque haya fracasado en todos los frentes —la cooperación en contraterrorismo o los intercambios económicos son ejemplos de gestión razonablemente eficaz— sino porque ha carecido de la arquitectura estratégica necesaria para convertir logros parciales en una relación bilateralmente equilibrada, en la que España no esté sistemáticamente en posición reactiva y defensiva.

Las cinco amenazas analizadas —las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, el contencioso de las aguas canarias, el Sáhara Occidental, la instrumentalización de la migración y el terrorismo islamista— no son problemas independientes: forman parte de un patrón coherente de presión ejercida por un Estado que ha definido con claridad sus objetivos estratégicos y que utiliza de manera sistemática y coordinada todos los instrumentos a su disposición para alcanzarlos. España, por el contrario, ha tendido a gestionar cada uno de estos contenciosos de forma separada, sin una visión de conjunto que le permita identificar los vínculos entre ellos y responder de manera igualmente articulada.

El contexto geoestratégico hace más urgente la necesidad de un cambio. La expansión de la influencia turca en Marruecos, la ausencia de una estrategia de la OTAN para el flanco sur, el déficit de contribución española a la Alianza, la instrumentalización rusa de las fricciones hispano-marroquíes y el escepticismo de Trump hacia los aliados europeos configuran un entorno en el que las debilidades estructurales de la política española tienen consecuencias que van más allá de la relación bilateral y afectan al posicionamiento estratégico de España en el sistema internacional.

La geografía no se negocia: España y Marruecos serán siempre vecinos. Pero la asimetría de poder y de estrategia en su relación bilateral no está escrita en la geografía: es resultado de decisiones políticas, algunas de ellas tomadas hace décadas y nunca revisadas, otras tomadas en el fragor de las crisis sin suficiente reflexión sobre sus consecuencias. Modificar esa asimetría requiere, antes que nada, reconocer que existe y que su perpetuación no es el resultado inevitable de la relación de fuerzas entre ambos países, sino de la ausencia de voluntad y capacidad para construir una política exterior española a la altura de los desafíos del siglo XXI.

ibcg@ufv.es
@ufvmadrid

+34 91 709 14 00
ufv.es

Ctra. Pozuelo - Majadahonda. Km 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Síguenos en RRSS para no
perderte nada
Instagram: @biencomun_ufv

Únete a nuestro canal
de difusión de WhatsApp:

